

DECLARACION PUBLICA

Durante años el gobierno ha estado enajenando el patrimonio fiscal, acumulado por generaciones de chilenos, sin admitir un debate nacional que precise los límites legítimos de su programa de privatizaciones. Mediante procedimientos que muchas veces han carecido de las mínimas condiciones de transparencia con que se deben manejar los bienes públicos, han pasado a manos de poderosos grupos económicos nacionales y extranjeros muchas empresas que gobiernos anteriores, de las más diversas tendencias, consideraron debían permanecer bajo control estatal para salvaguardar la independencia económica de la nación o para factibilizar políticas de fomento o redistribución. Entendiendo que tenía mandato legítimo para ello, el General Pinochet ha entregado a la explotación de dichos grupos no sólo importantísimos recursos naturales renovables y no renovables del país, sino que posiciones claves en las comunicaciones, energía, siderurgia, transporte, salud, educación, previsión, etc. La verdad es que jamás fue sometido a un debate nacional ni a ninguna forma de consulta ciudadana una materia que es de tal trascendencia que cuesta imaginar otras que comprometan más el interés y la soberanía nacional.

Independientes por la Democracia cree en la libre iniciativa y considera que es muy dañino para un país como el nuestro tener un estado mal empresario que, a través de la propiedad de muchas y diversificadas empresas, distorsiona los equilibrios económicos en casi todos los sectores de la actividad productiva. Por eso celebra la existencia de una política de subsidiariedad que ha terminado con el estado empresario allí donde no se cumplía ningún propósito útil con la propiedad fiscal. Pero ello no significa que sea legítimo llevar esa política hasta los extremos que antes señalamos sin que el país haya tomado una decisión soberana sobre tan delicada materia.

Bajo ese punto de vista, resulta inaceptable que el gobierno, en el período de transición a que lo obliga su categórica derrota electoral del 5 de octubre próximo pasado, se proponga extender el proceso privatizador a un

conjunto de empresas que, por su volumen y estratégica posición, tienen una significación económica y política superior a todo lo antes realizado. Creemos que un mínimo de respeto a la soberanía de la nación impone que tan trascendental materia sea resuelta a través de los programas de gobierno sometidos a la consideración ciudadana en las elecciones presidenciales y parlamentarias que se acercan. Definitivamente creemos que el gobierno, después del rechazo ciudadano a su proyecto político, carece de legitimidad para privatizar integralmente el transporte aéreo, naval, y urbano, el petróleo, la generación de energía eléctrica, las comunicaciones, etc., dado que la mejor demostración de lo que ello significa es que su propia deliberación interna impidió que lo hiciera cuando estaba vigente su mandato.

En consecuencia solicitamos al Supremo Gobierno que cancele sus propósitos al respecto y, si no lo hace, proponemos al conjunto de partidos y movimientos concertados por la democracia, del que formamos parte, que adopte el compromiso de, cuando tengan representación política para ello, revisar y adoptar las medidas legales para revertir dichas transacciones cuando el interés público las considere inconvenientes. Al mismo tiempo, solicitamos que, de adoptarse tal compromiso, se lo explicité públicamente de modo que los grupos que realicen tales adquisiciones lo hagan en pleno conocimiento de los riesgos en que incurren.

INDEPENDIENTES POR LA DEMOCRACIA

SANTIAGO, NOVIEMBRE 11 DE 1988.